

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/308096245>

Entre la urna, las redes sociales y la calle: las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en el Chile democrático

Chapter · September 2016

CITATIONS

9

READS

577

1 author:



Emmanuelle Barozet
University of Chile

80 PUBLICATIONS 483 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Desigualdades [View project](#)



Clases medias [View project](#)

Entre la urna, las redes sociales y la calle: las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en el Chile democrático

EMMANUELLE BAROZET¹

Introducción

En este documento se expone un estado del arte empírico acerca de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos en Chile, mediante un recorrido de las formas en que se ha establecido y analizado en las últimas décadas la vinculación entre ambos tipos de entidades². Es inevitable que para un trabajo de esta extensión no se mencionen todos los aportes que se han realizado sobre este amplio tema, ni se dé cuenta de la totalidad de los debates políticos y académicos. La meta de este documento, más que realizar una revisión exhaustiva, es dar cuenta no sólo de las articulaciones entre ambos actores y los cambios que han sufrido, sino que de los puntos de vista, escuelas de pensamiento, métodos de análisis y debates en torno a esta temática³.

1 Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES); correo electrónico: ebarozet@uchile.cl. Agradezco el apoyo del COES, CONICYT/FONDAP/15130009, así como los valiosos comentarios de Sofía Donoso, Francisca Gutiérrez y Paulina Osorio a una versión anterior de este texto.

2 Siendo el foco de este trabajo la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, no analizaremos relaciones entre los primeros y otros ámbitos de la institucionalidad política como son el Congreso, el Gobierno o el Poder judicial. A cambio, incluiremos a los sindicatos. Para una visión más general de las relaciones entre movimientos sociales y *polity members*, véase Somma y Medel (2016).

3 Como esta revisión se limita al caso de Chile, mencionaremos los debates internacionales sólo en caso de que permitan iluminar algún aspecto específico de las discusiones presentadas aquí. La ausencia de autores ampliamente consagrados a nivel internacional no debe ser considerada por lo tanto como un olvido, sino que como una priorización de los aportes chilenos. Otro sesgo de este trabajo corresponde a incluir casi exclusivamente aportes de la sociología y la ciencia política. Puntualmente se indicarán otros enfoques disciplinarios cuando permitan dar un punto de vista diferente o abrir nuevos espacios de análisis.

En Chile, la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, bastante simbiótica pero no exenta de conflictos, funcionó en gran parte del siglo XX como soporte de los gobiernos de turno para los proyectos de desarrollo nacional. Sin embargo, luego de la ruptura autoritaria y de la transición, esta articulación experimentó a partir de los años 1990 un doble proceso de alejamiento y recomposición. Esta evolución sigue estando sujeta a debate, particularmente en lo que respecta a su impacto para la gobernanza y el estado de la democracia en el país. Si bien este distanciamiento tiene características propias de la historia y trayectoria política de Chile, se discute su semejanza con procesos internacionales de desafección frente a la política tradicional y de recomposición de los movimientos sociales en un espacio público fragmentado. Debido a la transición limitada hacia la democracia, opera una primera y fuerte contracción de los movimientos sociales durante los años 1990, en el marco de una elitización de la política y contención de los actores sociales, antes de que se inicie desde el 2000 una recomposición de los últimos bajo una modalidad de mayor autonomía frente a los actores políticos tradicionales, recomposición aún en curso.

Como punto de partida usaremos definiciones clásicas de los dos principales conceptos que servirán de columna vertebral para este trabajo. Los partidos políticos son asociaciones formalizadas mediante estatutos que agrupan ciudadanos en torno a un programa político o una ideología, generalmente con el fin de conquistar o ejercer el poder a través de la conformación de cuadros políticos, quienes tienen vocación para representar a los ciudadanos (Duverger, 1976). En cambio, los movimientos sociales son entidades más informales o incluso redes de organizaciones y actores no formales que se movilizan en torno a temáticas conflictivas, en base a una identidad colectiva, y recurriendo para ese fin a variadas formas de protesta y acción política (Diani, 1992). En cuanto a las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos, no existe una separación tajante ya que, ambas entidades son parte del espacio político, con canales de intercambio y comunicación, por lo que se pueden comprender más como un continuo que como esferas autónomas. Si bien los movimientos sociales suelen ser más rupturistas que los partidos, pues buscan presionar a las autoridades con el fin de posicionar demandas, son también parte integral de los procesos políticos. Sin embargo, a diferencia de los partidos, no necesariamente aspiran a tomar o ejercer el poder, pero dependen mucho más que los partidos políticos de la movilización de sus simpatizantes para mantener su agenda en el transcurso del tiempo y concretar la posibilidad de un cambio social.

Las ciencias sociales locales e internacionales han tendido a estudiar por separado ambas organizaciones, generando especialidades poco dialogantes (Sawicki, 2011). No obstante, el repertorio de relación entre movimientos sociales y partidos políticos es bastante variado, aunque podría resumirse en cinco grandes modalidades: articulación, permeabilidad, alianza, independencia y transformación (Hanagan, 1998)⁴, tipología que usaremos para el caso de Chile. La *articulación* corresponde a la situación en la cual el movimiento social se organiza en torno al partido, con el fin de movilizar apoyo para el segundo en el marco de las consignas partidistas. Partiendo de una mayor interrelación, la *permeabilidad* corresponde a la situación en que los integrantes de los movimientos sociales operan dentro de los partidos con el fin de reclutarlos o influenciar la agenda partidista hacia su causa. La *alianza*, en tanto, responde a una negociación *ad hoc* entre ambas entidades para fines específicos, lo que no compromete la autonomía de ninguna de las dos. En relación con estrategias que suponen una mayor autonomía entre movimientos y partidos, la *independencia*, como cuarto elemento de la tipología, supone que el movimiento social tiene suficiente fuerza para que los votantes de los partidos apoyen su causa sin necesidad de una negociación *ad hoc*. Finalmente, la *competencia* corresponde a la situación en que los movimientos sociales actúan como partidos en la competencia política e incluso se constituyen en partidos en el mediano plazo (Hanagan, 1998).

En una primera parte y como punto de comparación, recordaremos brevemente los principales elementos históricos e internacionales que permiten entender las relaciones que se forjaron en Chile en el siglo XX entre movimientos sociales y partidos políticos, en la etapa de integración de las masas a la política. En una segunda parte analizaremos la reestructuración de los años 1990 y las consecuencias de la transición en la relación entre movimientos sociales y partidos políticos, particularmente el incremento de la apatía política y la crítica a la institucionalidad política. En una tercera sección detallaremos las características del auge de los movimientos sociales post 2000 y sus relaciones con los partidos políticos, desde el nuevo escenario económico y social hasta los contenidos de las reivindicaciones planteadas, antes de analizar en una cuarta parte el impacto diferenciado de este nuevo auge de los actores sociales en el sistema político y la agenda

4 Esta tipología, si bien descansa en un análisis de la historia de las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos europeos a lo largo de los siglos XIX y XX, permite establecer distinciones centrales y reproducibles para el caso de Chile. Para una aplicación a América Latina, véase a Somuano (2007).

de gobierno. Cerraremos con una sección sobre escenarios de proyección de la relación entre lo social y lo político, en el marco de un escenario incierto y bastante fluido de transformaciones culturales y tecnológicas.

1. Del vínculo clásico entre movimientos sociales y partidos políticos a la reconfiguración internacional

Gran parte de los análisis actuales acerca de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos se realiza en contraposición con una relación más «clásica» entre ambos, ampliamente descrita para el periodo anterior a los años 1970 mediante trabajos de historia, ciencia política y sociología. Partiremos de una de las afirmaciones que sustenta el trabajo que dio lugar durante el 2015 a las contribuciones de este libro: «la hipótesis con la cual organizamos este taller es que se ha producido una ruptura de la forma clásica de relación entre partido y movimiento social, entre política y sociedad en Chile. En este sentido, lo que se quiebra es la relación de imbricación entre partido y movimiento social que se había dado de forma sostenida en Chile a partir de los años 1930» (Garretón, 2015). Siguiendo esta argumentación, durante gran parte del siglo XX, los actores sociales en Chile han mantenido una relación estrecha con la estructura estatal y partidista (Scully, 1992; Drake, 1996). Esta matriz clásica, que corresponde a la imbricación entre partidos políticos y estructura pública mediante Estado de compromiso y movimientos sociales, concuerda con el modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones. Este modelo de desarrollo establece canales de cooperación corporativista con el movimiento obrero⁵, las organizaciones vecinales, los grupos mutualistas, dejando sin embargo fuera de los espacios de inclusión a los campesinos en el sector rural y a los pobres o pobladores en las zonas urbanas, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX (Espinoza, 1988; Garcés, 2004). En base a esta matriz, según cifras señaladas en Navia (2004), en el ámbito electoral, la cantidad de votantes pasa del 4,3% de la población total (8,7% de la población en edad de votar) en 1894, al 36,8% de la población total (69,1% de la población en edad de votar) en 1973.

5 Esta afirmación de corte general no permite dar cuenta de especificidades según actores sociales y momentos específicos. Retomando la argumentación de Angell (1972) acerca del movimiento laboral, la relación de los actores sociales con los partidos políticos pudo ser problemática y poco fluida, particularmente en términos de control sobre las organizaciones sindicales de parte de los partidos políticos, mientras las directivas de los sindicatos tenían poca influencia en la dirección de los partidos. Agradezco el comentario de Francisca Gutiérrez sobre este punto.

Esta alianza se mantiene en base a negociaciones en las cuales el mundo del trabajo es un elemento central, pero claramente con una preponderancia de las cúpulas políticas en la toma de decisiones y la instalación de un sistema de intermediación clientelar (Valenzuela, 1977), aunque por supuesto esta relación se da también con tensiones e incluso contradicciones. Sobre esta base, los partidos, algunos imbricados con la estructura estatal o en la cabeza de los gobiernos, están en el origen de las grandes reformas del siglo XX, como los proyectos de industrialización, la expansión del aparato estatal mediante la ampliación de la educación y la salud, o posteriormente en los años 1960, la reforma agraria, que permite, mediante sindicatos y federaciones campesinas de los partidos, avanzar en la integración de estos sectores marginados. Esta imbricación quizás se ha notado con mayor fuerza en los partidos y movimientos de centro-izquierda, pero caracteriza a casi todo el espectro político chileno.

A posteriori, en comparación con otros países de la región, la fuerza de los partidos políticos chilenos como entidad estructuradora de la política y del cambio social en la mayoría del siglo XX, ha sido interpretada como una debilidad histórica y estructural de la llamada sociedad civil, con una relación de tipo articulación desde los movimientos sociales, limitando su autonomía. En efecto, Chile parece ser un caso diferente al de otros países de la región, «donde más bien la tendencia ha sido o es, históricamente, estructuras partidarias débiles o inexistentes con un débil sustento ideológico (...) con sociedades más fuertes y movimientos sociales bastante más autónomos» (Ríos, 2015).

El auge de las movilizaciones en la segunda mitad de los años 1960 y en los primeros años de la década de 1970, junto con la polarización y finalmente la ruptura institucional de la sociedad chilena, dan paso a una desmovilización de los actores y su rearticulación en la clandestinidad, pero manteniendo el estrecho vínculo entre movimientos sociales y partidos políticos. Si bien la dictadura civil y militar se plantea una misión refundacional respecto del orden operante, e incluso sostiene un trabajo continuo de deslegitimación de los partidos y de la actividad política en general, perdura hasta el final de los años 1980 el tipo de relación entre movimientos sociales y partidos políticos descrito para las décadas anteriores. La actividad de los partidos es limitada por el marco antidemocrático y los movimientos sociales se enfrentan a la represión, pero su estrecha relación se puede observar por ejemplo en las movilizaciones post crisis financiera y económica de 1982 y en los movimientos que acompañaron la organización del plebiscito de 1988 luego de la represión organizada tras el intento de asesinato de Pinochet

en 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La existencia de un enemigo común sin lugar a dudas ayudó a que se mantuviera una estrecha dependencia entre movimientos sociales y partidos políticos desde el centro hasta la izquierda del espectro político y social. Las movilizaciones de los años 1980 en contra de la dictadura tuvieron una gran amplitud a pesar del contexto de represión, razón por la cual fueron un hito en la historia de la acción colectiva chilena, siendo además acompañadas casi sistemáticamente por los líderes de los principales partidos de la oposición. En esta etapa, al movimiento de los pobladores se agrega un componente juvenil popular, marcando una diferencia con las protestas juveniles que habían tenido lugar hasta los años 1970, más bien circunscritas a los jóvenes universitarios (Zarzuri, 2015).

Sin embargo, a pesar de que al final de la dictadura los partidos gozan de un alto respaldo de parte de la opinión pública, este se empieza a desvanecer debido a la opción tomada por la elite política de una transición contenida, motivada por el miedo a que las movilizaciones sociales superen el marco de la negociación y que los militares vuelvan a imponerse, como eco de los años 1970. La Iglesia Católica toma el mismo camino a pesar de haber sido parte de las protestas y contribuye por lo tanto a la desmovilización de los actores sociales en pos de la estabilidad de la transición. Empiezan entonces la desencanto de parte de los integrantes de la sociedad civil, en especial de los jóvenes (Oxhorn, 1995; Paley, 2001). Luego de los años de activa movilización ligada a la polarización de los años 1960-1980, la sociedad chilena entra en una fase irénica, con una democracia de «baja intensidad» y una «política de los consensos» como lemas del análisis político y académico (Huneus, 2014), situación determinada en parte por las presiones de los militares y la opción de la elite política de mantener la transición dentro de ciertos márgenes impuestos por los militares (Roberts, 1998). También, como lo resume Carlos Ruiz E., pierden fuerza los clivajes clasistas, pues la transición «se establece en base a la desarticulación de la estructura de clases del Chile nacional-popular» (Ruiz, 2015).

En paralelo con la dictadura, ocurren a nivel internacional transformaciones en los sistemas democráticos y una mayor disociación entre los movimientos sociales y la política tradicional, particularmente en relación con los «nuevos movimientos sociales» (NMS) en los años 1970, lo que tendrá ecos en Chile, aunque posteriormente. Por ejemplo, los movimientos indígenas o pro minorías raciales, el feminismo, el pacifismo antinuclear relacionado con el movimiento verde, que responden también al descentramiento de la política respecto del trabajo y se posicionan como

un desafío a la agenda política tradicional⁶. Esto se ve reforzado por otras mutaciones culturales, particularmente por cierta pérdida de interés en lo público, que responde en parte al auge de la valoración individual y colectiva de lo privado, debido a la riqueza que ofrece la vida familiar, amorosa o individual como espacio de realización personal (Kymlicka y Norman, 1994) en una sociedad de mayor abundancia y cada vez más volcada al consumo, sea material o cultural. En este contexto, lo público pierde relevancia, sobre todo en sociedades donde el capitalismo instala nuevas pautas de consumo o hace de este una forma de identificación e integración social, a través de un mercado que estructura gran parte de la oferta de servicios en el caso neoliberal. Esto explica en parte la pérdida de importancia del clivaje de clases en la estructuración de partidos y movimientos sociales. La sociología ya daba cuenta de esta disgregación entre los ejes de estructuración de la sociedad; el giro cultural mostraba desde los años 1970 la creciente autonomía de la cultura como espacio de constitución de identidades políticas. Lo que se evidenciará algunos años más tarde en Chile también se puede notar en otros países desde los años 1970, como por ejemplo la pérdida de centralidad de los intermediarios en la representación política, en parte por la crisis de la democracia representativa y el desarrollo de propuesta alternativas, sean estas directas, deliberativas, comunitarias o mediante variaciones que buscan una auto-representación más eficiente de la sociedad, de manera de evitar los fenómenos de captura del poder y de profesionalización de la política clásicos en la democracia representativa. Adicionalmente, luego de la caída del muro de Berlín, cierta *desideologización* se propaga a gran parte del planeta, profundizándose la crisis de los modos de representación y de los modelos de sociedad más revolucionarios, reduciendo el componente utópico que animó gran parte del debate político-social del siglo XX. Esta retirada de las ideologías y de los grandes relatos en el mundo occidental, deja un vacío que se propaga muy rápidamente e instala cierta perplejidad en la opinión pública frente a los horizontes de cambio, dejando con aires de pasado a varios de los actores centrales de la etapa anterior, como por ejemplo los partidos comunistas. Si agregamos

6 Si bien existen relaciones instrumentales entre estos movimientos sociales y partidos en momentos determinados, en esta etapa se instala una nueva pauta de relación entre ambos: la distancia y la desconfianza, es decir la independencia o competencia en términos de Hanagan (1998). Estos movimientos pueden considerar su institucionalización mediante partidos como un camino hacia la pérdida de legitimidad ante sus seguidores, por lo que en muchos casos cultivan una posición crítica alejada de los partidos políticos, llegando, sin embargo, a establecer alianzas en casos puntuales.

la mayor sensación de vulnerabilidad experimentada por muchos por el desarrollo de la globalización y de las redes de comunicación, así como la mayor presión sobre las comunidades nacionales y locales de parte de los mercados internacionales, se genera un cuadro de desintegración y desapego en un «mundo desbocado» (Giddens, 1999), donde se percibe que los partidos políticos y las instancias formales, al igual que las fragilizadas y desacopladas estructuras estatales, no logran proteger a los ciudadanos.

Respecto de Latinoamérica, en los países donde en los años 1980 no hubo dictaduras, apareció una corriente de resistencia frente a la liberalización económica (Silva, 2009), integrada por movimientos considerados como de tercera generación⁷. De modo más específico, desde los años 1990, en el continente surgen con fuerza los movimientos indígenas luego del estallido de 1994 en Chiapas, en relación con la cuestión campesina que se extenderá a Brasil en los años siguientes con el Movimiento de los Sin Tierra, así como a Bolivia y Ecuador, frente a la multiplicación de acuerdos de libre comercio a nivel regional y mundial. Al final de la década y durante el 2000 toman fuerza los movimientos de trabajadores, particularmente en el caso argentino. En otras regiones, frente a la presión de la globalización, de la modernización económica, de la aceleración de la explotación de los recursos naturales y de las desintegraciones sociales y territoriales, en medio de una desafección política, se dan otros ejes de reconfiguración de la relación entre lo social y la política, como ha sido el caso de la religión tras una intensa fase de laicización en el siglo XX en gran parte del mundo. Sin embargo, en el caso latinoamericano, y chileno en particular, a pesar de los avances del pentecostalismo, la crisis que atraviesa la Iglesia Católica por los casos de pedofilia y el encubrimiento de parte de sus autoridades, no ha dejado espacio para una reconquista religiosa, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito público. Parte de la recomposición del tejido social se orienta, por lo tanto, a enfrentar las consecuencias negativas del modelo económico y de la globalización, de la cual emerge de forma particularmente clara el pleito en contra de la desigualdad, en un contexto más liberalizado (Somuano, 2007).

7 La primera ola de protesta anti-neoliberal ocurre en los años 1980 en el marco del ajuste post crisis de la deuda, como última resistencia del orden social anterior. La segunda ola ocurre al final de los años 1990 y al inicio del 2000, siendo particularmente fuerte en Argentina, Bolivia y Ecuador como respuesta a la extensión del modelo de mercado a sectores aún no liberalizados como la agricultura, el agua o el gas (Roberts, 2016).

2. La reestructuración de los años 1990 y las consecuencias de la transición

En Chile, luego de la desmovilización operada desde arriba por los partidos durante la transición, se instala entre una parte de la izquierda y de los sectores populares y medios un sentimiento de desencanto debido a los horizontes limitados que ofrece esta democracia «pactada» (Godoy, 1999). En los años 1990 aparece una nueva apatía (Baño y Faletto, 1992), detectada primero entre los jóvenes, quienes después del plebiscito de 1988 dejan de inscribirse en el padrón electoral, mientras en otros grupos etarios aumenta el voto nulo. Las teorías de la juventud («ni ahí») se acoplan a la constatación de la «indiferencia y apoliticismo de vastos sectores que a lo largo de estos años han ido perdiendo el sentido de lo público, lo que no es de extrañarse en una sociedad en que predomina el endeudamiento, una educación privada y la ausencia de formación cívica» (Garretón, 2014, p. 23). La mayor volatilidad del electorado y su creciente inclinación hacia las personas por sobre los programas muestran las dificultades que enfrentan los partidos políticos para mantener cautivo un electorado cada vez más desmovilizado y que hasta mediados de los 2000 no pareciera tampoco buscar otras formas de acción colectiva. Adicionalmente, se puede señalar el envejecimiento del padrón electoral en los años 1990 y 2000 debido al desinterés en la política, pero también al desincentivo que significa el voto obligatorio, y luego un fuerte aumento de la abstención con el paso al voto voluntario en 2012. Al respecto, la ausencia de un «opponente» ideológico, como ocurrió durante la guerra fría o durante la dictadura, tampoco fomenta el antagonismo que suele ser la base de la acción colectiva más transversal, aunque las posturas en contra del neoliberalismo, desde distintas ópticas, hayan ganado terreno tanto a nivel internacional como en Chile. En este marco, todos los indicadores de interés por la política, participación, confianza institucional, apoyo a los partidos e intención de voto, en las principales encuestas (CEP, CERC, Encuesta Mundial de Valores, entre otras fuentes⁸), experimentan un descenso sostenido desde

8 En términos de metodología, los años 1990 presencian la reactivación de los estudios de opinión (CEP, Latinobarómetro y CERC), los cuales muestran, encuesta, tras encuesta el aumento de la desafección ciudadana por los partidos políticos, así como la degradación de la relación de amplios sectores de la población con la política tradicional. A partir de mediados del 2000 se agregan nuevas encuestas, en la medida que se consolidan empresas de investigación de opinión pública, centros de estudio, *think tanks* y universidades privadas (encuestas UDP, Adimark y CADEM, por ejemplo).

1992 (Somma y Bargsted, 2015). Finalmente, la voluntad de abrir una agenda ciudadana mediante votación de una ley de participación no llega a buen puerto ni bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), ni bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), a pesar de la existencia de propuestas de gobierno en ambos casos. Los pocos instrumentos participativos en funcionamiento no significan un real empoderamiento de los ciudadanos por múltiples razones, entre las cuales asoman el centralismo que opera en Chile y el hecho que los mecanismos de consulta sean funcionales al despliegue de políticas públicas que apuntan a la resolución de problemas de escaso alcance político. Finalmente, muchos de estos mecanismos se reducen al uso de fondos concursables que generan competencia entre organizaciones más que colaboración.

Pero a diferencia de otros países de la región, donde las medidas neoliberales fueron introducidas en períodos democráticos por partidos de derecha, centro o incluso centro-izquierda, en el caso de Chile este cambio fue uno de los resultados de la dictadura, por lo que la crítica al modelo neoliberal tuvo cabida en los partidos políticos de izquierda en los años 1990 y parte del 2000. Incluso hubo una «institucionalización» o representación de la crítica, aunque de forma moderada, a través de partidos como el PS, el PPD y fuera de los partidos de gobierno mediante el PC o el Partido Humanista, acotando el espacio para que los movimientos sociales se hicieran los portavoces de la crítica social. Esta situación difiere de países cercanos, donde esta crítica se tuvo que expresar desde los años 1990 por fuera del sistema formal de partidos o por candidaturas extra-partidistas, personalistas o populistas (Roberts, 2012). Esta institucionalización de la crítica acarrió una menor actividad de los actores sociales en Chile, particularmente respecto de los movimientos de derechos humanos, del movimiento feminista y del movimiento mapuche. Es relevante para el caso de Chile señalar que una fracción importante de estos tres conjuntos de actores se institucionalizó mediante la creación de comisiones y subsecretarías⁹ en los años 1990, bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). En particular, el movimiento mapuche había mantenido relaciones relativamente fluidas con los partidos de oposición hacia el final de la dictadura, incluyendo la firma del Acuerdo de Imperial de 1989 en el

9 Particularmente, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada en 1990, el Servicio Nacional de la Mujer creado en 1991 y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena creada en 1993.

marco de la transición. Pero esta relación se resiente profundamente en 1997 cuando el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) opta por apoyar proyectos de generación eléctrica en zonas mapuche. A partir de ese año, el divorcio entre movimiento mapuche y partidos se hace patente y seguirá profundizándose con un ciclo contencioso muy activo alrededor de 2001 y nuevamente después de 2011, pasando de la articulación a la independencia (Hanagan, 1998). La ratificación del convenio 169 de la OIT en 2008, que se considera un avance legal, no satisface las expectativas de muchas comunidades mapuche, particularmente sus demandas en términos de mecanismos directos de toma de decisión. También se restan de los acuerdos institucionales fracciones más radicales de los movimientos de derechos humanos o feministas que consideran que los avances institucionales no son suficientes, pero sin lograr mayor visibilidad en la agenda social y política.

Se concreta en Chile, a lo largo de la década de los años 1990, el desacople entre los partidos políticos y la opinión pública, particularmente de sus sectores activos representados por movimientos sociales, con un receso de la conflictividad social, en un marco de «des-ideologización». Llama particularmente la atención la distancia entre bases muy desconectadas de los partidos políticos y dirigencias sociales que mantienen cierto nivel de vinculación con las cúpulas partidistas, pero con distancia de sus propias bases, llevando incluso a tensiones con estas¹⁰. Esto constituye una situación bastante particular, pues varios países cercanos conocen en el mismo periodo la reactivación de movimientos sociales de gran importancia en contra del giro neoliberal en el continente, como por ejemplo en Argentina, Bolivia y Venezuela. Para el caso de Chile, este es conocido como el periodo de la «autonomización de la protesta» (Somma y Bargsted, 2015), reforzada por la toma de consciencia de un creciente malestar subjetivo en la sociedad debido a los costos individuales y colectivos del proceso de modernización (Moulian, 1997; PNUD, 1998; Lechner, 2002). La tradicional imbricación entre lo político y lo social deja espacio a una disociación, como crítica al «transformismo» de la sociedad chilena. El fin de la dependencia entre los cuatro ejes descritos por Garretón—estructura, actores, procesos y orientaciones culturales—

10 Por ejemplo, respecto del movimiento sindical, Francisca Gutiérrez señala en un comentario a este texto que «el protagonismo de los partidos en la CUT contrasta con la amplia apatía de las bases respecto de la política institucional. El control de los partidos en la Central gatilló divisiones importantes en esta organización (la creación de otras dos centrales) y explica, en parte, la no afiliación de casi dos tercios de los sindicatos de empresa».

vuelve borroso no sólo la constitución de nuevos actores sociales, sino que tiende a la segmentación de la sociedad en grupos separados, instalando una heterogeneidad estructural en cada campo social (Garretón, 2014).

Sólo mantienen cierta actividad los movimientos señalados anteriormente, al cual debemos agregar los nuevos grupos ambientales. El movimiento mapuche, particularmente activo al inicio de los años 1990, no logra tampoco ganar centralidad en la agenda. Así se conforma lo que fue llamado un «archipiélago» de actores sociales, ya que aumenta el número de organizaciones y de actores sociales, pero sin que logren constituirse en movimientos sociales fuertes (De la Maza et al., 2012). Los actores más claramente desarticulados son los movimientos de pobladores y de sectores populares, cuando parte de la relación con el sistema político concertacionista adopta nuevamente un modelo clientelar o de cooptación, donde los partidos políticos juegan un papel de intermediación en la redistribución de beneficios sociales (Barozet, 2005), en el marco de una política pública más focalizada y más activa.

Cabe agregar para el caso de Chile que las consecuencias de la transformación neoliberal se traducen en una mayor individualización (Araujo y Martuccelli, 2012), pero también en una mayor fragmentación social. Se nota más claramente que en otros países de la región un repliegue sobre el círculo familiar, donde la sociedad delega al individuo la responsabilidad de costear su educación, su salud, su vejez y sus riegos, limitando a lo mínimo la posibilidad de una solidaridad de mayor envergadura entre generaciones, clases sociales o regiones, en pos de una mayor capacidad de consumo. En este marco, los partidos políticos experimentan dificultades para generar discursos orientados a provocar alianzas. Cabe también tomar en consideración que los partidos políticos no logran captar nuevas generaciones por falta de atractivo y proyectos de cambio, pero también porque sus prácticas internas tienden a excluir a los jóvenes, particularmente a las mujeres, o a no dejarles paso hacia instancia y de mayor responsabilidad, además de centrifugarlos cuando dejan de ser jóvenes (Espinoza y Madrid, 2010). Sin embargo, como veremos a continuación, esta aparente apatía y distanciamiento con la política tradicional no impidió durante la década del 2000 la reformulación de las metas y estrategias de varios actores sociales en un entramado sociopolítico distinto, menos institucionalizado, pero que dará importantes frutos en la década siguiente.

Otro elemento a tomar en consideración respecto de los años recientes es el aumento de la crítica a la institucionalidad política, con una galopante desconfianza hacia la política tradicional. El aumento de la crítica hacia

la estructura política tradicional se da en un contexto muy particular: en 2000 se termina la etapa democratacristiana de la administración gubernamental y se acentúa el giro a la izquierda moderada bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y luego bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Ambos aumentan el gasto público, pero esto no logra contener el descontento social. Se nota particularmente en la provisión de servicios básicos como la educación, sector en el cual se desencadena el movimiento denominado «de los pingüinos» en 2006, que inaugurará una nueva relación con los partidos políticos y significará un punto de inflexión en la política chilena. De hecho, el acotado petitorio inicial del movimiento de los secundarios termina en un cuestionamiento de la totalidad del marco legal de la educación escolar en Chile, debido a la falta de respuesta de las autoridades. También son relevantes para esta nueva etapa los sectores de salud, por un lado con horas de espera para recibir atención e infraestructura deficiente, y por otro lado el transporte público, donde se genera un amplio descontento en la población en 2007 luego del fracaso de la implementación del Transantiago en la capital. En estas tres esferas, los más afectados son los sectores pobres, populares y en parte la clase media. Finalmente, el descentramiento del trabajo en el orden social y el receso de los sindicatos han cerrado parcialmente otro vínculo entre lo social y la representación de las demandas hacia el aparato estatal, pues sólo un 16,4% de la fuerza laboral está sindicalizada (Gutiérrez, 2016). Existe entonces un claro deterioro de los mecanismos de intermediación entre institucionalidad política y sociedad (PNUD, 2014). En tanto, a finales de la década del 2000, Chile exhibe tasas muy bajas de simpatía hacia los partidos políticos, de interés en la política o de participación cívica, a pesar del alto apoyo al gobierno de Bachelet hacia el término de su primer mandato.

En lo institucional, en un régimen hiper presidencialista y con un sistema electoral binominal que tiende a excluir a las minorías, el Congreso también ve su rol como espacio de discusión limitado, sin que se generen áreas compensatorias, por lo que las esferas de deliberación más abiertas se trasladan a la calle y a las redes sociales. Al respecto, la desafección por los partidos políticos se enmarca en una crisis general de representación de la política clásica, que carece de relatos acerca de las posibilidades colectivas de cambio, más allá de los destinos individuales. Los partidos no logran captar y representar a los actores minoritarios, populares y excluidos, y cuando se lo proponen o cuando se busca lanzar una nueva estructura partidista, no obtienen una cobertura suficiente ni la cantidad de votos que les permitiría consolidarse institucionalmente,

como ha sido el caso en las últimas elecciones, por ejemplo, del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), la Izquierda Unida, el Partido Progresista (PRO), Chile Primero, el Partido Ecologista Verde o el Partido Igualdad". Más allá del contexto internacional donde también se observa este fenómeno, el paso de los dirigentes sociales y políticos al gobierno en el momento de la transición transformó a muchos cuadros sociales en élites políticas, limitando su inclusión a las dos grandes coaliciones conformadas por el sistema binominal. Si bien el sistema político ganó en estabilidad, perdió en representatividad y en capacidad de procesar las demandas sociales, es decir en su papel de «correa de transmisión» hacia la institucionalidad (De la Maza, 2015). También se generan fuertes limitaciones en el horizonte de cambio, debido a los enclaves autoritarios, recién superándose los más graves en 2005, pero sin corregir el problema fundamental de la Constitución: haber sido impuesta en un marco no democrático.

Esta situación de distanciamiento ha dado lugar a reinterpretaciones más recientes, usando marcos internacionales. Se ha sostenido en general que los movimientos sociales serían más activos cuando existe una mayor proximidad entre ellos y los partidos políticos (teoría de la cercanía), pues se generarían alianzas que beneficiarían a ambos y los recursos llegarían más fácilmente hacia los movimientos sociales. Aunque no sea el único caso en la región, como lo veremos a continuación, Chile podría ser evidencia del caso contrario, es decir de la teoría del distanciamiento, donde el desencanto frente a la política tradicional o formal activa las protestas callejeras como forma alternativa de presionar sobre la agenda de las autoridades de turno (Somma y Medel, 2016).

11 Las dificultades de constitución y luego de acción en el espectro político-electoral de Evópoli y Amplitud con los independientes de derecha y centro-derecha, Fuerza Pública con independientes de centro o Revolución Democrática con la bancada estudiantil, muestran también la ambigüedad de la relación de los independientes con el sistema partidista, pues optan por fundar sus propias estructuras para competir, con resultados mitigados hasta el momento. La integración de algunos miembros de Revolución Democrática a los equipos de trabajo ministeriales de Michelle Bachelet ilustra sin embargo la eficiencia de su propósito y su capacidad técnica, especialmente en el ámbito de la reforma educacional. Finalmente, Izquierda Autónoma podría en un mediano plazo constituirse como partido político.

3. El nuevo auge de los movimientos sociales post 2000 y su relación con los partidos políticos

A modo de contextualización respecto de los años más recientes y de las nuevas movilizaciones sociales que se han adueñado del escenario político chileno, cabe señalar que la situación actual difiere ampliamente de la anterior a los años 1980, particularmente en cuanto a la cantidad de personas marginalizadas o excluidas. Comparada con las masas rurales hasta los años 1960 o con los pobres urbanos de los años 1980, hoy en día la sociedad chilena exhibe una mayor integración de la población al sistema social y económico, aunque de manera desigual y diferenciada (Mayol et al., 2013). Las casi tres décadas de crecimiento económico desde fines de los años 1980 han permitido una mayor inclusión mediante empleo y expansión de los servicios sociales. Si bien la desigualdad socioeconómica es una de las grandes deudas de las últimas décadas, el aumento del PIB per cápita a más de US\$ 15.000 y la baja de la pobreza al 20% de la población implican un escenario muy distinto para los actores políticos y sociales (Banco Mundial, 2015; MDS, 2015). Esta situación también diferenciaría a Chile en la última década de otros países de la región, cuyos ciclos contenciosos han estado mayoritariamente vinculados con demandas de inclusión social de los sectores más postergados o de resistencia frente a eliminación de derechos en el marco de la privatización de sectores nuevos de la economía (Roberts, 2016). Chile sería entonces un contraejemplo respecto de las teorías de la acción colectiva que señalan que en general el auge de los movimientos sociales se da en períodos de crisis económica y en momentos de mayor cercanía con los partidos políticos. La bonanza económica en las últimas décadas y el aumento del nivel educacional de la población pueden ser interpretados como el piso para una mayor emancipación de formas tradicionales de intermediación política, tal como ocurrió en los años 1960 en los campus de los países industrializados del norte. Este nuevo empuje se da también sobre la base de la expansión de Internet y el mayor acceso a redes sociales, particularmente entre los jóvenes y los sectores más acomodados, superando distancias geográficas y en algunos casos sociales (Valderrama, 2013). Internet también favorece la transparencia, al facilitar el escrutinio público y al compensar el sesgo de cobertura de los principales medios de comunicación. Este conjunto de elementos favorece el surgimiento de nuevos movimientos sociales catalogados como postmodernos, o no relacionados con demandas directamente materiales, como por ejemplo los defensores de barrios

patrimoniales, los movimientos en contra de proyectos considerados como contaminantes¹² (Biskupovic, 2015; Canteros, 2011), los okupas y los colectivos animalistas.

Respecto del periodo más reciente, además del aumento del nivel de vida, cabe señalar que la situación chilena se enmarca en un auge a nivel internacional de protestas muy heterogéneas, especialmente a partir de 2011. Estos movimientos engloban desde la primavera árabe ese mismo año, los indignados en España, los variados movimientos *Occupy* en EE.UU. y Hong-Kong por ejemplo, movimientos estudiantiles en Canadá y Gran Bretaña, grupos anticorrupción y anti alza de precios en Brasil. Si bien el auge contencioso en Chile tiene sus propias raíces, responde también en parte a dinámicas globales (Donoso y Von Bülow, 2016). Este ciclo se abrió en 2006, pero sigue generando a la fecha expresiones y demandas variadas, que se mantienen o reactivan cada cierto tiempo¹³, con fórmulas diversas y cambiantes de relaciones con los partidos políticos. En la mayor parte de los movimientos recientes se persigue profundizar en una serie de derechos sociales que las reformas neoliberales dejaron fuera de la discusión. Se busca *descomodificar* las relaciones sociales y mejorar de forma sustancial la institucionalidad política existente. Las principales expresiones de este nuevo ciclo de protesta son el «movimiento de los pingüinos» y luego estudiantil, con el apoyo no sólo de sus familias, sino que de una parte importante de la población por lo menos en 2011, cuando más del 70% declaró apoyar sus demandas (CERC, 2011).

Fuera de la masividad del movimiento estudiantil, una de las novedades de este nuevo ciclo contencioso es la multiplicación de las protestas ambientales en contra de grandes proyectos extractivistas o contaminantes, particularmente cuando involucran empresas transnacionales, como por ejemplo las campañas contra el proyecto HidroAysén de la empresa Endesa («Patagonia sin represas»), contra la construcción de una central

12 Particularmente los actores sociales NIMBY (Not In My Back Yard, es decir, no en mi patio trasero).

13 En la academia, en el mismo periodo, se diversifica la cantidad de estudios sobre movimientos sociales y partidos políticos, aunque no todos se enfocan en la relación entre ambos. Esto se debe no sólo al ciclo de acción colectiva mismo, sino al hecho que el número de jóvenes doctores aumenta desde la década del 2010. Cabe destacar al respecto interesantes aportes con métodos mixtos, incluida la creación de bases de datos de protestas para el periodo 2000-2012 (CLACSO; Somma y Medel, 2016), con más de 2300 eventos registrados para ese periodo. También se tiende a usar datos para Chile de series de grandes encuestas internacionales, como el World Values Survey.

a carbón en Barrancones por parte de la empresa Suez o las protestas en contra de la minera Barrick en el proyecto Pascua Lama. Llama la atención el éxito de los movimientos ambientalistas en paralizar algunos de los proyectos emblemáticos y presionar al más alto nivel para que las autoridades finalmente no aprueben su puesta en operación, a pesar de la heterogeneidad y ausencia de centralización organizativa en el mundo ambientalista. Obviamente, estos éxitos no pueden esconder que muchos otros proyectos sí se encuentran en ejecución¹⁴. Esta fuerte activación se debe en parte al auge de estos movimientos a nivel internacional, pero también al aumento de la presión extractivista por el modelo neoliberal y el precio de los *commodities* a nivel internacional, como parte de la globalización comercial y financiera. Por estas mismas razones, también cabe mencionar la intensificación y radicalización del movimiento mapuche desde los años 2000 en sus diversas expresiones, frente a la presión extractivista y la ausencia de mejora en la situación de la población indígena, traducándose en el uso de estrategias extremas como el corte de caminos, la ocupación de edificios públicos, la toma o quema de predios, de maquinaria forestal y de camiones. Como consecuencia se aplicará en varias oportunidades la ley antiterrorista en La Araucanía, mientras que el uso desmedido de la fuerza pública es denunciado por las organizaciones de protección de los derechos humanos, degenerando en 2010 en huelgas de hambre de los activistas encarcelados (Bidegain, 2016). Adicionalmente, emerge una serie de movimientos más esporádicos como las huelgas de los subcontratistas, trabajadores de distintos sectores¹⁵, movimientos para la descentralización, la protección del patrimonio urbano y finalmente los movimientos de género, que se podrían calificar en términos generales como pro-

14 Cabe notar que las movilizaciones son mucho más limitadas o inexistentes cuando se trata de la empresa estatal Codelco, como por ejemplo el caso de Chañaral (Schorr, 2015).

15 Respecto de los trabajadores, la forma de acción colectiva común sigue siendo la huelga, con un aumento sostenido de las huelgas ilegales en los últimos años. También e puede destacar los movimientos de portuarios, mineros, personales de aeropuertos, sector transporte, salmonicultura e incluso del sector forestal a pesar de que en estos ámbitos no necesariamente existe tradición sindical. Si bien el número de personas sindicalizadas es bajo, los sindicatos han desarrollado estrategias de negociación o de presión que han obtenido frutos (Gutiérrez, 2016). Acerca de la generación de información, cabe mencionar la iniciativa del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que se encuentra en fase de actualización para el periodo 2010-2015 de la base de datos elaborada por Alberto Amstrong desde los años 1970, que permite contar con información con una serie histórica poco común.

diversidad (De la Maza, 2015)¹⁶. Otro actor más ocasional, pero no menos importante en este periodo son los movimientos de consumidores, que aparecen luego de escándalos como la colusión de las farmacias en 2008, de los pollos en 2011 y recientemente de las papeleras en 2015 o de los supermercados en 2016.

Todos estos actores esconden a su vez una gran diversidad. Como se puede observar, varios de estos movimientos defienden derechos de minorías, con base en características adscriptivas de las personas e incluso con base en proyectos comunitaristas. Los petitorios indígenas, desde Isla de Pascua a La Araucanía, incluyen gobierno autónomo, derechos colectivos sobre las tierras y culturales, así como restitución de derechos de propiedad ancestrales. En cambio, el movimiento más emblemático de los últimos diez años, el estudiantil, engloba desde proyectos de transformación social de la mano de líderes de federaciones con un alto grado de integración social, incluida una fuerte proyección política y capacidad demostrada de presión sobre los partidos políticos y la agenda pública, hasta encapuchados y libertarios en contra del modelo y marginalizados. Las acciones vandálicas al margen de las protestas muestran también la presencia de actores radicalizados en el movimiento estudiantil, sin que por ello alcancen realmente una dimensión insurreccional. Respecto de los portadores de una crítica radical a los partidos políticos y de forma más general a la política tradicional, existen desde propuestas sólo contestatarias pero sin proyecto alternativo, hasta grupos que propugnan una sociedad civil auto-representada, pero que, sin embargo, no han logrado hasta el momento salir de cierta marginalidad política y por lo tanto se encuentran lejos del punto de densidad que implica el respaldo de las mayorías.

En términos generales, estos movimientos comparten más que un momento sinérgico. La gama de reivindicaciones es muy amplia, pero se puede resumir en cuatro grandes grupos: demandas corporativas, demandas de mayor protección y regulación frente a la economía liberal, demandas identitarias y finalmente reivindicaciones de cambio de modelo. Varias apuntan a la falta de regulación imperante en el sistema económico

16 No pretendemos aquí dar cuenta de todos los movimientos sociales y sus relaciones con los partidos políticos. Aunque muy interesantes, por razones de espacio no profundizaremos en la situación de otros actores menos mediáticos pero igualmente presentes en la escena social y política como los animalistas, los pro-vida y los movimientos pro-aborto, los okupas, las organizaciones variadas de trabajadores fuera de los sindicatos, los pro-legalización de la marihuana, entre otros.

chileno, que permite los carteles y monopolios¹⁷, el lucro, la falta de calidad y la sobreexplotación de los recursos naturales, demandando un marco regulatorio. También en los movimientos ambientalistas se ve un mayor nivel de radicalismo debido a que los partidos políticos chilenos desde la vuelta a la democracia no han propiciado un cambio de modelo económico que permita salir del extractivismo; nunca se logró formar una bancada verde que tuviera impacto en la agenda política, mientras se iban agudizando severos problemas de contaminación en varias partes del país. La nueva radicalidad del movimiento mapuche e indígena en general, así como la respuesta del Estado chileno en términos de represión¹⁸, muestran la relevancia de la configuración territorial de estos movimientos.

Una de las demandas más desafiantes para los partidos y la representación política corresponde a las identitarias. En efecto, la oferta de múltiples identidades –laborales, sexuales, indígenas, de clase, territoriales, etarias– refrendadas por la sociedad de consumo y el espejo de los medios de comunicación, instalaron la idea de que los actores sociales son más fluidos y propensos a la constitución instrumental que estructural. Como señala Garretón, «no hay orientaciones culturales colectivas definidas que se compartan, sino hibridaciones fragmentarias de orientaciones, predominando un individualismo basado en diversos tipos de consumo, excepto lo que queda del sustrato político cultural clásico, al que se le agrega el eje autoritarismo-democracia, que ya no abarca el conjunto de comportamientos, sino que es sólo relevante para la política electoral y ello en un universo cada vez más reducido» (Garretón, 2014, p. 72). Uno de los problemas es que parte de estos nuevos actores sociales no necesariamente busca ser representado ante la institucionalidad mediante partidos políticos y por lo tanto vacía a estos de su rol, limitándolos a la gestión de programas poco abiertos y centrados en sus propias necesidades institucionales.

17 Con una crítica recurrente a la «letra chica» que permite desconocer acuerdos tomados en base a criterios generales. Esta expresión se volverá el símbolo de la desconfianza hacia las elites y las autoridades.

18 La represión de parte de la fuerza pública es claramente más dura respecto de los movimientos mapuche que de otros movimientos, incluso mediante la aplicación de la ley de seguridad del Estado y la ley antiterrorista, por lo que existe un silenciamiento de dicho actor social. La cantidad de muertos indígenas en enfrentamientos entre población mapuche y fuerzas de orden en el marco de la militarización de La Araucanía muestra también la especificidad de la situación en comparación con otros movimientos sociales.

Una de las preguntas de fondo que levanta este punto respecto del nuevo ciclo de acción colectiva y la crisis de los partidos políticos es la forma en que se están construyendo hoy las identidades políticas. Esta pregunta por supuesto está vinculada con la construcción de las identidades sociales en general, pues estas no se forman en el vacío, sino que en espacios de socialización y circulación de ideologías. Pero si bien la dimensión identitaria es fuerte para el caso de los nuevos actores sociales en Chile, no podemos aplicar visiones clásicas de los nuevos movimientos sociales europeos post años 1970, donde se considera que las demandas ya no son de corte materialista. Para América Latina, como pudimos observar en los párrafos anteriores, muchas de las demandas se relacionan con la mejora de las condiciones de vida y por lo tanto se genera una micro-politización de espacios en los cuales los partidos políticos no tienen llegada o no son considerados legítimos.

Dentro de este panorama, una franja más radical de actores plantea un cambio del modelo, particularmente el movimiento estudiantil. Entre las múltiples facciones de este actor juvenil, la tendencia a la exigencia de cambios profundos ha sido dominante. Esto involucra una dimensión refundacional respecto del régimen que opera desde los años 1990, incluida la exigencia de un nuevo pacto social mediante proceso constituyente, con el fin de superar los enclaves de la era pinochetista. Esta última fase de movilización en Chile está caracterizada por la idea de que llegó el momento de «cambiar el modelo», lo que significa avanzar hacia una sociedad que supere la etapa post-pinochetista (Garretón, 2014), es decir pasar a una nueva etapa en la democratización del país. En efecto, los gobiernos de la Concertación habían «administrado el modelo» introduciendo cambios para corregir sus efectos más negativos. En cambio, estos movimientos buscan empujar la política tradicional varios pasos más adelante, en un marco de repolitización de la sociedad chilena (PNUD, 2015). Al respecto, Chile es uno de los pocos países de la región que había mantenido cierta continuidad con la dictadura y por eso estaba en deuda en cuanto a dar un salto cualitativo respecto no sólo de su institucionalidad política, sino que de la relación entre esta y la sociedad.

En términos sincrónicos, uno de los puntos interesantes en el caso de Chile es que las protestas empiezan bajo un gobierno de centroizquierda, pero posteriormente se agudizan bajo un gobierno de derecha; es decir, se dan inicialmente como respuesta a gobiernos de centroizquierda que intentaron generar inclusión social dentro de los parámetros de la sociedad de mercado. Sin embargo, el movimiento alcanza su mayor

auge después de la llegada al poder en 2010 de un gobierno de derecha compuesto por gerentes de empresas y tecnócratas defensores del modelo, pero con poca experiencia pública. Los gobiernos de la Concertación, si bien habían generado desencanto, también disponían de potentes redes clientelares y de cooptación que permitían gestionar en parte las demandas sociales. La instalación en el poder en 2010 del primer gobierno elegido de derecha en décadas genera un nuevo marco de oportunidades para los movimientos sociales, que encuentran en Sebastián Piñera y su gobierno (2010-2014) un antagonista más claro. El terremoto de febrero de 2010 retrasará un año las protestas, pero claramente el nuevo escenario político facilita la salida a la calle y a los medios de numerosos movimientos sociales con el lema del cambio del modelo.

4. ¿Qué impacto y qué consecuencias hay sobre el sistema político y la agenda política?

Este auge de los movimientos sociales y de la desafección hacia la política tradicional es acompañada en el caso chileno por una rápida y profunda crisis de la institucionalidad en los años recientes, debido a una serie de escándalos de proporciones, sean estos partidistas (caso Penta), de gobierno (caso Dávalos), afectando incluso los ámbitos religiosos con numerosos casos de pedofilia encubiertos por jerarcas católicos. Como lo señaló Rosanvallon con el concepto de «contrademocracia» (2006), esta situación refuerza la crítica clásica de parte de los ciudadanos y de los movimientos sociales hacia los partidos, que incluye una denuncia de su oportunismo, de su cortoplacismo relacionado con la concentración en las elecciones más que en proyectos de cambio de mediano plazo y finalmente su elitización. La reciente demostración de colusión entre grupos económicos y partidos políticos muestra con mayor claridad aún la distancia y la sospecha que se instala hacia las estructuras partidistas en cuanto parte del *establishment* dispuesto a transar con la ética con tal de recibir financiamiento electoral o a entrar en el juego de las ganancias económicas¹⁹. Aunque este tipo de escándalo haya afectado a Chile de forma mucho más tardía que otros países de la región, donde era común desde la década anterior, el descalabro instala muy rápidamente una profunda crisis partidista, pues los escándalos de corrupción afectan

19 La crisis de la Universidad Arcis arrastra también al Partido Comunista al descrédito que afecta al conjunto de los partidos políticos.

la totalidad del espectro político clásico, lo que conlleva el desfile de los dirigentes de los partidos políticos en los tribunales y las fiscalías. Si bien no le deja el paso a un movimiento del estilo «que se vayan todos», como ha ocurrido en varios países de la región, todavía no se vislumbra una salida. De hecho, recientemente los casos de corrupción también han afectado la jerarquía militar (Milicogate) o incluso ámbitos no relacionados directamente con lo político, pero vinculados con las cúpulas directivas de Chile como es el caso del fútbol. En 2015, la crítica a la institucionalidad se apodera del escenario político y mediático, por la toma de conciencia de que no existen ámbitos públicos y privados donde la corrupción o prácticas reñidas con la ética no hayan extendido sus redes. En este marco, donde América Latina se caracteriza por sus altas tasas de desconfianza interpersonal e institucional, estos escándalos tienen un efecto demoledor y permiten entender las bajísimas tasas de confianza exhibidas por las principales encuestas de opinión en los últimos años, con cifras aún más fuertes para Santiago y las grandes ciudades.

En general, los movimientos sociales descritos anteriormente no poseen una articulación directa con partidos políticos o una forma de relación directa y fuerte con la institucionalidad política, manteniéndose más bien en los casos de independencia (Hanagan, 1998). En los últimos años, varios estudios han abordado más directamente la relación entre movimientos sociales y partidos. En base a estos estudios se puede afirmar que a partir de 2003-2004 aumenta de forma sostenida el número de protestas en todos los ámbitos descritos –particularmente las protestas estudiantiles y regionalistas– y que también aumenta fuertemente el número de personas que participan en promedio en las protestas, con una multiplicación por cuatro en ese mismo tiempo (Somma y Medel, 2016). Sin embargo, en el mismo periodo, la participación de miembros de partidos políticos en las protestas ha disminuido drásticamente. Existe presencia de miembros de los partidos políticos sólo en el 60% de protestas en el periodo 2000-2012. El Partido Comunista concentra el 60% de esa cifra (partido ausente del Congreso hasta 2013, lo que le otorgó antes de esa fecha un papel de *outsider* y una relación de articulación con varios movimientos sociales afines), seguido muy lejos, y por debajo del 10%, por el PS, el Partido Humanista y el PPD, con alianzas *ad hoc* entre movimientos y partidos (Somma y Medel, 2016; Hanagan, 1998). Esta tendencia general de distanciamiento entre movimientos sociales y partidos políticos debe sin embargo ser matizada en algunos casos específicos, como por ejemplo el movimiento sindical, el movimiento por los derechos homosexuales y algunos movimientos

regionalistas, que sí mantienen relación cercana con partidos políticos. También existen pasarelas en términos de espacios de sociabilidad compartidos entre ambas entidades. Si bien la investigación empírica sobre *multiposicionalidad* o compromisos plurales es incipiente en Chile, no significa que no exista este fenómeno (Alenda, 2011), ampliamente descrito en otras latitudes (Sawicki, 2011).

Acerca de la movilización de recursos, entrevistas a dirigentes sociales indican que casi ningún movimiento recibe fondos de los partidos políticos (Somma y Medel, 2016). Pueden recibir aportes de organizaciones internacionales, fundaciones (movimientos ambientales), de sus propias comunidades o de la alcaldía (grupos de defensa del patrimonio), de las universidades y de sus ex estudiantes, o de la organización de eventos (mediante federaciones en el caso del movimiento estudiantil), directamente del Estado como en el caso de los movimientos mapuche no radicalizados que defienden la cultura indígena, mediante fondos estatales, pero rara vez de los partidos. Los movimientos mapuche más radicales son financiados por las mismas comunidades y se alejan de la institucionalidad política tradicional, considerada como parte del aparato opresor, siendo este el caso más fuerte de alejamiento entre movimiento social y partidos políticos para el caso de Chile. De hecho, varios movimientos como los ambientalistas o movimientos más autónomos estudiantiles no quieren recibir ningún fondo ni apoyo de cualquier tipo de parte de los partidos, para mantener su independencia. En este mismo ámbito de distancia y desconfianza hacia la política institucional, pero en su expresión máxima, se puede señalar que, si bien los encapuchados corresponden a un fenómeno de cierta antigüedad, el aumento de las protestas callejeras a partir de 2006 pone en la palestra mediática la presencia de grupos violentos que copan los medios de comunicación, según el sesgo de cobertura habitual de los medios. Pero los encapuchados no son los únicos que recurren a formas extremas de acción política. Cabe destacar la acción de Andha Chile u otros grupos que ejercen estrategias de disrupción en la vida cotidiana de la ciudad, para atraer la atención de la opinión pública. Estos grupos reniegan de cualquier relación con los partidos políticos, dejándolos en un lugar de *establishment* traidor respecto de los intereses de los grupos marginales.

Sin embargo, en el caso de los movimientos estudiantiles, varias federaciones ligadas a partidos sí reciben aportes de ellos, en especial del PS, del PC y de la UDI, aunque no sea en cantidades importantes o mayores a otras fuentes de ingresos (Somma y Medel, 2016), configurándose

desde casos de articulación, permeabilidad y alianza (Hanagan, 1998). A pesar de la distancia en cuanto a la recolección de fondos, parte del trabajo de los movimientos sociales implica diálogo con miembros de partidos políticos y sus cúpulas, pues se trata de una de las formas de influencia en la agenda política. Los autores afirman que los partidos se acercan cuando los movimientos ya han ganado presencia en los medios, lo que alimenta en el mediano plazo la desconfianza y el carácter instrumental de las relaciones mutuas. Al respecto, llama la atención la particularidad del caso chileno, donde el intento de crear un partido mapuche fracasó, en contraste con la experiencia de países cercanos como Bolivia o Ecuador, donde fueron creados exitosamente partidos indígenas, llegando incluso al poder (Madrid, 2012). En el otro extremo, la mayor fluidez entre dirigentes sociales y dirigentes políticos se da en el movimiento ambientalista, donde los líderes en general provienen de niveles socioeconómicos más altos y comparten redes sociales en círculos semejantes como parte de su bagaje de clase (Schaeffer, 2016). El éxito de la presión sobre autoridades partidistas y gubernamentales es una muestra de ello, particularmente la acción «Vota sin represas» durante la campaña presidencial de 2013, cuando siete de los nueve candidatos adhirieron a la campaña contra HidroAysén.

La distancia inicial entre movimientos sociales y partidos políticos²⁰ no impedirá sin embargo la cooptación, o para decirlo de forma más positiva, la integración de varios líderes del movimiento estudiantil de 2011 a la política formal, que es también uno de los roles de los partidos políticos en cualquier régimen. Son estos mismos líderes estudiantiles quienes conformaron posteriormente la bancada estudiantil (Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola y Gabriel Boric²¹) o trabajan en ministerios (Camilo Ballesteros y Miguel Crispi). También se puede mencionar el caso de Iván Fuentes, dirigente sindical de Aysén que ingresó también al congreso en 2014. Sin embargo, el costo de este paso al *establishment* está cargado de desprecio de parte de las nuevas generaciones de dirigentes estudiantiles, pues los más libertarios consideran que el paso al congreso es una forma de traición al espíritu del movimiento. La ambigüedad del paso de la posición de *outsider* a la

20 Al respecto, los sistemas de vocerías rotatorias, particularmente del movimiento de secundarios, intenta, romper con la verticalidad de las formas de organización anterior y la cooptación de parte de los partidos políticos (Donoso, 2013).

21 Incluso Camila Vallejo fue nombrada presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Giorgio Jackson es uno de los políticos mejor evaluados según la encuesta CEP de diciembre de 2015.

de *insider* también se nota en la postura de Marco Enríquez-Ominami, quien intenta capitalizar el descontento y obtiene una votación del 20% en 2009, que no logrará mantener, particularmente debido a los cuestionamientos al financiamiento de sus campañas electorales, en el marco del escándalo político-financiero que sacude al país desde inicio de 2015. Si bien está en curso, falta sin embargo tiempo para evaluar el éxito de las estrategias de permeabilidad (Hanagan, 1998) de varios de los movimientos hacia los partidos y el aparato de gobierno.

Una vertiente de los análisis en los años más recientes se interesa en estos nuevos actores en su dimensión de autonomía propia y capacidad de cambiar su mundo y el mundo social fuera del efecto de tratamiento de demandas hacia el Estado que realizaban los partidos políticos. Las teorías del «empoderamiento» corresponden en parte a la difusión de una serie de análisis acerca de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1994) y la ciudadanía, pero también de las corrientes de la investigación-acción (Rodríguez-Villasante et al., 2000), que favorecidas por los postulados de organizaciones internacionales darán lugar a interpretaciones «optimistas» de la capacidad de transformación de los actores sociales, independientemente de su relación con los partidos políticos. Efectivamente, los ciudadanos están más informados que en décadas anteriores, especialmente por el efecto de la penetración de Internet y las redes sociales entre los más jóvenes y las personas con mayor educación. También existe un activismo digital potente, pero si bien está claro que Internet facilita la difusión de la información y baja los costos de coordinación y organización de la acción colectiva, por lo que facilita prescindir de las estructuras partidistas, no se puede concluir mecánicamente que un ciudadano más informado sea necesariamente un ciudadano más empoderado. El término «empoderamiento» se refiere a tener poder, es decir a la capacidad de influir en la institucionalidad y el poder político (Ruiz, 2015). Las redes sociales mediante Internet constituirían más bien un espacio de *subactivismo* que ayuda a la conformación de identidades, pero en muchos casos no constituye acción política como tal (Valenzuela et al., 2012).

Adicionalmente, cabe tomar en consideración, en contra de visiones más optimistas, que varios movimientos sociales también representan intereses corporativos cuando el papel de los partidos políticos idealmente implica recoger demandas de forma transversal en pos del bien común, ya que no todos los movimientos sociales logran plantear en el caso chileno proyectos de transformación amplia de la sociedad que permitan ir más allá de los intereses sectoriales. Este es el caso de los movimientos de

usuarios y consumidores, mucho más instrumentales, de poca duración y reactivos, pero que han adquirido cierta importancia en las redes sociales y las agendas comunicacionales, aunque bastante alejados de la institucionalidad política tradicional. Los casos de colusión, pero también los casos de estudiantes estafados por universidades o de pobladores que reciben viviendas de mala calidad, muestran no sólo la centralidad del consumo y del acceso a bienes básicos en la vida de la población, sino que dan cuenta de la mayor dificultad de parte de los grandes grupos económicos de operar bajo el velo de la opacidad. Las promesas no cumplidas de la sociedad capitalista también son parte de la constitución de estos actores móviles. Esta situación permite entender parte del movimiento estudiantil, cuando se ve frustrada la posibilidad de movilidad social individual pregonada por los gobiernos de la Concertación desde los años 1990. Por último, las exigencias de derechos que portan estos movimientos no tienen al Estado como interlocutor, sino que a las empresas mismas, lo que no redundará en un fortalecimiento de la interfaz con lo público.

El desarrollo de los medios de comunicación por Internet también deja margen a los poderes fácticos, particularmente empresariales y mediáticos, para imponer sus intereses, debido a la capacidad de influencia de los medios de comunicación en la confección de la agenda pública y política en un país como Chile. El hecho que los grandes medios se saturen con información sin mayor relevancia política sacada de Internet también es considerado por algunos como un vaciamiento del poder de cambio de los medios, que se dedican a monitorear las redes más que a investigar la noticia. Finalmente, en América Latina, el uso de Internet sigue siendo limitado a grupos más jóvenes y urbanos, de mayor nivel educacional y socioeconómico, por lo que se sigue sesgando la caja de resonancia hacia ciertos grupos de la sociedad, ya empoderados en otras dimensiones (Somma, 2015)²². En este contexto, el análisis de iniciativas catalogadas como «empoderamiento» muchas veces deja al descubierto prácticas clientelares de los partidos políticos y las empresas, por lo que no corresponden siempre a la instalación de nuevos derechos. Finalmente, el abuso del término «ciudadanía», como nuevo *buzzword* en la blogosfera, muestra que esta palabra puede encubrir buenos deseos

22 Según Somma (2015), en base a datos de LAPOP 2012, Chile es el país con mayor uso de Internet, con un 55% de la población que lo usa algunas veces al mes, pero sólo un 16% compartió alguna información política.

más que realidades de participación social y política y no necesariamente apunta a proyectos de democratización o a una sustitución eficiente de los partidos políticos.

Analizando ahora los logros de los movimientos sociales en su relación con los partidos políticos, podemos señalar que el movimiento estudiantil de 2011, que responde a la no-solución de las demandas planteadas en 2006 y a la cooptación de parte de los dirigentes del «movimiento pingüino», consigue posicionar en la agenda política un discurso abarcador de las desigualdades que genera el modelo imperante. Uno de los grandes éxitos del movimiento estudiantil es que supera ampliamente a los partidos políticos en su capacidad de determinar la pauta política, forzando para las elecciones de 2013 la imposición en el debate de una agenda de reformas profundas, con base en una transformación de las percepciones respecto de lo que es injusto en la sociedad chilena (Mac-Clure y Barozet, 2015). Esto constituye una alteración del consenso anterior respecto de que el reformismo era la forma de alcanzar el anhelado desarrollo en un horizonte de una o dos décadas. De particular interés resulta en este caso la capacidad de varios actores, particularmente el estudiantil, de señalar que es más urgente iniciar un proceso de redistribución que postergar una mayor justicia social en pos del equilibrio y el crecimiento económico.

En cuanto a la influencia más indirecta, la capacidad de presionar la agenda política depende de una serie de elementos. No cabe duda, por ejemplo, el éxito del movimiento estudiantil en posicionar el tema de la gratuidad de la educación y más ampliamente de la desigualdad²³ debido al número de jóvenes y estudiantes en fase de estudio, llegando a un contingente de varios millones de personas, además del apoyo de sus familias. Adicionalmente, las poblaciones más jóvenes y con mayor estudio son más propensas a protestar, como ocurre con los estudiantes, concentrados en grandes campus y con más tiempo disponible que las personas con trabajo remunerado. El éxito depende por supuesto de la amplitud de las movilizaciones, de su presencia en las grandes ciudades y en los medios de comunicación, de su capacidad de generar empatía en

23 El «movimiento de los pingüinos» de 2006 logra el reemplazo de la LOCE por la LGE, mientras el movimiento estudiantil de 2011 obtiene la reducción de las tasas de interés de los préstamos estudiantiles, entre otras medidas, y una mejor supervisión de las universidades de las cuales se sospecha que lucran, antes de influir directamente en el debate electoral de 2013 y conseguir la promesa de la gratuidad en parte de la educación. Claramente, la no-inclusión de los colegios de elite es una de las limitaciones del movimiento.

el resto de la población y de sus nexos con la institucionalidad política, en particular con los partidos. Algunas iniciativas ambientales también han logrado posicionarse en estos ámbitos como el movimiento «Patagonia sin Represas» o los movimientos a favor de la igualdad de derechos para las poblaciones homosexuales, especialmente en los sectores medios y altos de la población.

En cambio, el movimiento mapuche no logra mayores avances en los últimos años, lo que explica en parte su radicalización al final de la década pasada, por no haber obtenido la satisfacción de demandas fundamentales de las comunidades como por ejemplo avances en la ley comunitaria o el retroceso de las empresas forestales (Bidegain, 2016). Este fracaso relativo en comparación con el movimiento estudiantil se vincula también al hecho que representa los intereses de una fracción mucho menos importante de la población y más alejada de Santiago. Además ha influido la falta de coordinación entre actores mapuche, su distancia con los partidos, la escasez de recursos económicos, irrisorios frente a los que manejan las grandes empresas de extracción de recursos instaladas en la región, y la distancia con el resto de la opinión pública, lo que genera el aumento de la violencia en la zona. La concentración de las protestas en territorios mapuche y la censura mediática han limitado su capacidad de aparecer en la agenda nacional de medios.

En lo que se refiere a la traducción de estos movimientos en influencia política directa mediante inclusión de sus demandas en las agenda de gobierno y luego en reformas, existen situaciones bastante variadas, aunque en términos generales, dentro del contexto del continente, se considera que las protestas anti neoliberales de tercera generación han tenido mayor impacto que las dos olas anteriores, en los años 1980 para la primera y al final de los años 1990-inicio del 2000 para la segunda²⁴ (Roberts, 2016). Está claro en todo caso que los movimientos de 2011 tienen una relación directa en Chile con la creación de una coalición de centroizquierda en 2013 que incluyera al Partido Comunista y definiera un programa de reformas más ambiciosas que las propuestas en las dos décadas anteriores. Luego, en términos de traducción en votos, si bien el nuevo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) es elegido con un programa de cambio social y político, la alta abstención muestra que no existen vasos comunicantes directos entre movimientos y resultados electorales, menos aún una relación directa con el voto de izquierda.

24 Aunque claramente su impacto ha sido fuerte en ambas olas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde incluso emergieron fuerzas políticas anti-sistema como resistencia al ajuste estructural.

Finalmente, fuera de los movimientos que han recibido mayor atención de la academia y de los medios, existen silencios y desconocimiento respecto de la capacidad de logro de otros grupos movilizados o de sus relaciones con los partidos, como ocurre con grupos de elite. Obviamente las formas de movilización de grupos empresariales no pasan ni por protestas de calle ni por campañas mediáticas, pero a pesar de ser más restringidos y más discretos, no dejan de ser centrales en la representación de intereses políticos, económicos y sociales, considerando que cuenta, con organizaciones potentes como son por ejemplo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) o presencia directa en los partidos políticos. Aunque golpeados por los escándalos político-financieros de los últimos años, estos actores mucho menos estudiados cumplen sin embargo un rol importante en la reproducción de las elites y la determinación de la agenda política, en especial mediante la relación privilegiada que tienen con los partidos políticos. Si bien esta afirmación es válida para los sectores de derecha, también lo es en parte para actores de centro-izquierda representados en el mundo empresarial.

5. ¿Qué proyección política formal existe para los movimientos sociales y qué representación existe para los ciudadanos?

La hipótesis sostenida por Garretón (2014) es que parte de los actuales movimientos sociales busca una refundación de la relación entre el Estado y la sociedad, o la «recreación de la comunidad política» (p. 74). La demanda por un programa de reforma intensivo y particularmente la demanda fuerte por una nueva Constitución mediante mecanismos participativos desde una fracción de la población dan cuenta de ello, con el fin de establecer una legitimidad no instrumental para la desgastada institucionalidad chilena. Este proceso de recomposición post dictadura, que ha ocurrido en varios países de la región había quedado postergado en Chile, pero parece no aminorar en la agenda de los actores sociales, a pesar de los intentos de parte de la oposición de negar su relevancia y de las dificultades que enfrenta la Nueva Mayoría para llevar adelante varias reformas de gran envergadura.

El momento que vive Chile corresponde sin lugar a dudas a una recomposición de la vinculación entre sociedad y política y a un recambio en el liderazgo social y político, después de que la misma generación estuviera en cargos políticos desde los años 1980. Esta apertura y nueva etapa de mayor «fluidez institucional» (Roberts, 2016) abre una serie de

preguntas. ¿Qué escenarios enfrentamos respecto del futuro cercano? Si bien no se ve claramente una forma alternativa de vinculación entre lo social y lo político para los años venideros, uno de los posibles escenarios en América Latina tiene que ver con la tentación populista²⁵, siempre presente en momentos de crisis y que tiene la ventaja mediática de ofrecer un modelo de relación entre liderazgo político y masas sin intermediación aparente. Si bien el populismo está presente en los últimos años en varios niveles de la política en Chile, desde el fracaso de la candidatura de Joaquín Lavín a la Presidencia de la República en 2006 no ha tenido expresiones fuertes o por lo menos mucho más limitadas que en países cercanos. No se puede descartar sin embargo un nuevo auge si la baja del precio del cobre iniciada en 2015 lleva a una crisis económica o si se profundiza la crisis política por los escándalos político-financieros, al punto de llegar a alternativas del estilo «que se vayan todos», como sucedió en Argentina al inicio de la década del 2000.

Es cierto que la presión de los movimientos sociales ha transformado las agendas partidistas y cambiado el rumbo de las elecciones de 2013, empujando a un programa mucho más ambicioso de reformas y a la aprobación de una nueva aunque conservadora reforma tributaria. En tanto, las reformas del trabajo, de la educación y de la Constitución están en curso, pese a los constantes frenos de los sectores opositores. Empero, está muy claro que en Chile existen pocos mecanismos de participación en el actual sistema político, por lo que es considerado como un caso de «democracia representativa restringida» (Ríos, 2015). Los pocos espacios de participación se concentran a nivel local y en general están limitados a la toma de decisión sobre algunos ítems del presupuesto municipal, la organización barrial para luchar contra la delincuencia o la mejora del entorno, espacios de decisiones donde los dirigentes partidistas locales tienen además mucho peso. En el marco de la actual Constitución, no se han implementado mecanismos asociados a la democracia directa, participativa o deliberativa y en el caso de las poblaciones indígenas

25 Si bien es imposible en este espacio agotar la discusión en torno al populismo, recogemos la definición que planteó Pierre-André Taguieff (Taguieff, 2002, 175): los líderes populistas «explotan, con o sin éxito, el imaginario popular alimentado por ideales democráticos, en los cuales domina el deseo de abolir la barrera o la distancia e incluso cualquier diferencia entre gobernados y gobernantes, entre los de abajo y los de arriba». Guy Hermet retomó esta definición, dándole un giro respecto del uso del tiempo: el populismo apela al ideal de realización en tiempo real de la voluntad del pueblo, negando de paso cualquier principio de realismo y estigmatizando todas las estructuras de intermediación que «confiscan» el poder popular para el beneficio de unos pocos (Hermet, 2003).

aún está por verse si la ratificación del convenio 169 de la OIT, que está siendo aplicado en algunos temas, permitirá mejorar los mecanismos de consulta. Los avances en el ámbito de la calidad de la democracia están por lo tanto en deuda, por lo que los movimientos sociales no tienen espacios fluidos de influencia en la política, fuera de la presión sobre los partidos. Ejemplo de ello es la dificultad de implementación que han tenido en Chile las elecciones primarias en la mayor parte del ajedrez político, lo que contribuye a limitar la renovación de las elites políticas y mantiene una fuerte probabilidad de reelección de las autoridades en ejercicio a nivel local, regional y nacional (Siavelis, 2009).

Respecto de innovaciones institucionales, las comisiones asesoras presidenciales y ministeriales, ampliamente usadas en Chile desde la vuelta a la democracia para proponer políticas y nuevas reglamentaciones, han funcionado como mecanismo compensatorio e incluso fiscalizador frente a la creciente crisis de representación de los partidos políticos y del órgano legislativo, sumando integrantes de los movimientos sociales al trabajo del Congreso y del Gobierno. Sin embargo, si bien contemplan mecanismos de consulta, no son consideradas por la opinión pública como un dispositivo democratizador, debido a su carácter técnico.

En un ámbito muy relevante también para la relación entre lo social y lo político, se observa en Chile en los últimos años, al igual que en otros países, una *judicialización* de la política, que corresponde a la presentación de denuncias ante tribunales nacionales e internacionales de situaciones que no tienen resolución en la política tradicional o mediante mecanismos políticos constitucionales y reglamentarios vigentes. Interesantemente, no se trata sólo de obtener juicios favorables, sino que de generar nuevas interpretaciones, sentar precedentes y por lo tanto hacer evolucionar la jurisprudencia hacia una mayor democratización. Esto ha sido particularmente claro respecto del sector salud, de los sindicatos (Gutiérrez, 2016) y de los movimientos ambientales o pro-diversidad. La centralidad adquirida en Chile por el poder judicial es una muestra muy clara de ello, especialmente a partir de la reforma procesal penal que se inicia en 2005²⁶. Esta tendencia, sin embargo, puede también ser interpretada como una mayor dependencia de los movimientos sociales con el Estado, pues el poder judicial es parte de él.

26 Llama la atención, por ejemplo, que en los años 1990 cualquier observador lego de la política chilena conocía los nombres de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA. En cambio, hoy en día estos nombres son casi desconocidos, mientras los fiscales nacionales y regionales encabezan regularmente los noticiarios.

En cuanto a limitaciones, llama poderosamente la atención la ausencia a nivel nacional de una propuesta sobre el modelo económico en su dimensión productiva. Los movimientos sociales y algunos partidos políticos proponen alteraciones en algunos casos muy sustanciales o refundacionales del modelo en su dimensión político-social e incluso económica en lo que tiene relación con las desigualdades. Sin embargo, estas propuestas, salvo en el caso de los movimientos de defensa del medio ambiente o indígenas, no elaboran una alternativa al actual modelo de desarrollo basado en la extracción de materias primas. Este tema es a todas luces el gran ausente del debate público para el futuro. Los actores sociales pre-dictadura tenían de alguna forma una estrecha relación con el modelo de desarrollo (campesinos y mineros particularmente), relación que no ocurre hoy con la mayor parte de los actores movilizados. Por este conjunto de razones, no se ven aún opciones de organización social alternativas a los partidos políticos, que son los únicos en el sistema político vigente que cuentan con cierta continuidad temporal, financiamiento político permanente, reglas del juego institucionalizadas y participación en el sistema político formal mediante candidaturas a cargos eleccionarios y públicos.

Finalmente, la opción de abrir un proceso constituyente desde 2016 será sin lugar a dudas parte de las redefiniciones de las relaciones entre partidos políticos y movimientos sociales. De hecho, uno de los escollos habituales en los procesos constituyentes, más allá de su carácter traumático en los dos siglos pasados en el caso de Chile, consiste en combinar a la vez la auto-representación de la sociedad y los canales formales de la reforma constituyente. En el marco del actual desprestigio de la política formal, para los sectores movilizados a favor de la reforma está claro que no puede ser el Congreso el encargado de la redefinición constitucional, mientras los sectores de elite y empresariales se oponen a la elección de una asamblea constituyente amplia. Las propuestas mixtas que circulan en la actualidad muestran la dificultad que plantea la necesaria inserción de los actores movilizados en el proceso constitucional. Si bien la experiencia de los años recientes muestra que los movimientos sociales han logrado no sólo plantear sus demandas, sino que están obteniendo logros diferenciales en cuanto a su procesamiento, la reforma constitucional puede ser considerada como el parangón de este esfuerzo, pues obliga a una redefinición completa de las relaciones entre sociedad y política, aunque por supuesto, este proceso puede ser más limitado o captado por los sectores ya institucionalizados, perdiendo una posibilidad única de que el sistema político recupere ciertos niveles de legitimidad, o como señala Garretón, hay que «*ciudadanizar la política [...] y politizar la ciudadanía*» (Garretón, 2014: 88).

Conclusión

Una de las conclusiones para el caso de Chile acerca de la relación entre movimientos sociales y partidos políticos es que a pesar de las condiciones poco favorables para la acción colectiva, esta experimenta una recomposición desde finales de los años 1990 y una primera expresión potente a partir de 2006, en un contexto de distancia con la institucionalidad tradicional, particularmente los partidos políticos, lo que va en contra de una de las afirmaciones más comunes de los estudios en este campo (Somma y Medel, 2016). Las razones del distanciamiento entre ambas organizaciones en el caso de Chile son variadas, pero el tipo de transición que opera en este país hace que los partidos opten por no descansar en los movimientos sociales, que por lo demás no necesitan, pues el sistema binominal les permite conseguir mayorías con un tercio de los votos. Mientras, los movimientos sociales adquieren suficiente autonomía para plantear demandas consideradas como legítimas por la opinión pública, en el marco de la crisis de la política tradicional y de una baja de la represión hacia ellos, lo que determina nuevas oportunidades políticas para los actores sociales. El nivel de masividad de las protestas en el último lustro muestra que dicha legitimidad es duradera y suple las falencias del sistema institucionalizado de representación. En Chile, la expresión de estos movimientos ha logrado, sobre todo en el caso estudiantil y ambiental, posicionar sus demandas en la agenda política y que sean tratadas por el gobierno. La duda es si el sistema político podrá tratar otras demandas que ha descartado hasta el momento, particularmente las reivindicaciones mapuche. Tampoco queda claro, mientras no haya cambio constitucional, si el auge de los movimientos sociales abre un real y novedoso espacio en la forma de hacer política y de relacionarse con los partidos políticos, sea manteniendo su autonomía o entrando al juego político formal.

Es muy pronto todavía para definir qué dirección tomará la eventual recomposición —o no— de los vínculos entre movimientos sociales y partidos políticos. Los movimientos fuera de Chile, como los indignados, contra la concentración de la riqueza o por la diversidad sexual, étnica y cultural rara vez han buscado o logrado una institucionalización partidista, ni de paso ganado elecciones para conquistar el poder por fuera del soporte partidista. En el caso chileno, además, la profunda crisis institucional que se vive podría prolongarse y mantener la distancia entre lo social y lo político. No obstante, las rápidas transformaciones que operan las nuevas tecnologías y la salida del escenario político de

los actores que vivieron la Unidad Popular, la dictadura y la transición pueden llevar al auge de actores sociales no amarrados por el trauma de lo ocurrido en 1973, que lleven adelante una relación más instrumental con los partidos políticos. La relación entre Estado y sociedad puede seguir alejada de la estructura partidista aunque no pueda prescindir de ella para los procesos electorales. La total autonomización de los movimientos sociales de la estructura partidista no parece por lo tanto una hipótesis plausible, pues los partidos políticos, por muy vilipendiados que estén ahora particularmente por su rol en los escándalos político-financieros, siguen siendo el vehículo legal de la retórica y de la práctica electoral. En el estado actual de las cosas, la posibilidad de una nueva Constitución tampoco abre la puerta a nuevas formas de relación entre lo social y lo político, ya que los movimientos sociales no logran todavía una institucionalización suficiente como para competir con los grandes partidos.

Bibliografía

- ALEND, STÉPHANIE (2011). «Pensar las transformaciones del compromiso y de la participación política». *Revista de Sociología* n°25, pp. 7-13.
- ANGELL, ALAN (1972). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. Santiago: Ediciones Era.
- ARAUJO, KATHYA y MARTUCCELLI, DANILO (2012). *Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena*, Santiago: LOM ediciones.
- BAÑO, RODRIGO y FALETT, ENZO (1992). *El apoliticismo. El factor generacional*. Santiago: Facultad de Ciencias Sociales, Documento de Trabajo, Serie Estudios Políticos, 25.
- BAROZET, EMMANUELLE (2005). «Los nuevos patrones del clientelismo en las urbes chilenas. Reflexión acerca del uso político de las organizaciones comunitarias en Santiago Centro e Iquique». En Espinoza, Vicente y Porras, José Ignacio (editores), *Introducción a la teoría y práctica del análisis de redes sociales (ARS)*. Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago-Universidad Bolivariana, pp. 361-400.
- BIDEGAIN, GERMÁN (2016). «From cooperation to confrontation: The Mapuche movement and its political impact, 1990-2014». En: Donoso, Sofía y von Bülow, Marisa (editoras), «Postransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts». New York: Palgrave-MacMillan, por publicar.
- BISKUPOVIC, CONSUELO (2015). *Une ethnographie de la culture civique experte à Santiago du Chili: le cas du Réseau de Défense de la précordillère*. Tesis doctoral, Doctorado en Antropología de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS y del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, París y Santiago.

- CANTEROS, EDUARDO (2011). «Las agrupaciones vecinales en defensa de los barrios». *Polis* n°28, Santiago.
- CERC (2011). Barómetro de la política, agosto-septiembre.
- COHEN, JEAN, ARATO, ANDREW, CIVIL (1994). *Society and Political Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- DELAMAZA, GONZALO (2015). «Sociedad civil, ciudadanía y movimiento social en el Chile de hoy». Taller de movimientos sociales y partidos políticos: Los cambios que afectan la relación clásica de la política y sociedad en Chile. Fundación Chile21-Fundación Friedrich Ebert, 9 de julio de 2015.
- DELAMAZA, GONZALO; CUNILL, NURIA Y JOIGNANT, ALFREDO (editores) (2012). *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: RIL.
- DIANI, MARIO (1992). «The Concept of Social Movement». *The Sociological Review* 40, no. 1, pp. 1-25.
- DONOSO, SOFÍA (2013). «Dynamics of Change in Chile: Explaining the Emergence of the 2006 Pingüino Movement». *Journal of Latin American Studies*, vol. 45, n°1.
- DONOSO, SOFÍA y VON BÜLOW, MARISA (editoras) (2016). *Posttransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts*. New York: Palgrave-MacMillan.
- DRAKE, PAUL (1996). *Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone in Comparative Perspective*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- DUVERGER, MAURICE (1976). *Les partis politiques*. París: Armand Colin.
- ESPINOZA, VICENTE (1988). *Para una historia de los pobres de la ciudad*. Santiago: Sur Ediciones.
- ESPINOZA, VICENTE y MADRID, SEBASTIÁN (2010). *Trayectoria y Eficacia Política de los Militantes en Juventudes Políticas*. Santiago: PNUD.
- GARCÉS, MARIO (2004). «Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas». *Política* n°43, pp. 13-33.
- GARRETÓN, MANUEL ANTONIO (2014). *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina*. Santiago: LOM ediciones.
- GARRETÓN, MANUEL ANTONIO (2015). «Primera sesión de taller de movimientos sociales y partidos políticos: Los cambios que afectan la relación clásica de la política y sociedad en Chile». Fundación Chile21-Fundación Friedrich Ebert, 9 de julio de 2015.
- GIDDENS, ANTHONY (1999). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Profile.
- GODOY, OSCAR (1999). «La transición chilena a la democracia: pactada». *Estudios Públicos* n°74, pp. 79-106.
- GUTIÉRREZ, FRANCISCA (2016). «Coping with neoliberalism through legal mobilization: The Chilean trade union movement's new tactics and allies». En Donoso, Sofía y von Bülow, Marisa (editoras), «Posttransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts». New York: Palgrave-MacMillan, por publicar.

- HANAGAN, MICHAEL (1998). «Social movements, incorporation, disengagement and opportunities. A long view». En: Giuni, Marco; McAdam, Doug y Tilly, Charles (editores), *From contention to Democracy*. Lanham, MA, Rowman and Littlefield Publishers.
- HERMET, GUY (2003). «El populismo como concepto». *Revista de Ciencia Política de la Universidad Católica*, n°1, pp. 5-18.
- HUNEUS, CARLOS (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago de Chile: Taurus.
- KYMLICKA, WILL y NORMAN, WAYNE (1994). «Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship». *Ethics*, Vol. 104, No. 2, pp. 352-381.
- LECHNER, NORBERT (2002). *Las sombras del mañana*. Santiago: LOM ediciones.
- MAC-CLURE, OSCAR y BAROZET, EMMANUELLE (2015). «Judgments on (in)justice in a mature neoliberal regime: Results of an empirical game-based research». *Current Sociology online*, first published on July 24, 2015.
- MADRID, RAÚL (2012). *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*. Cambridge, Cambridge University Press.
- MAYOL, ALBERTO; AZÓCAR, CARLA Y AZÓCAR, CARLOS (2013). *El Chile Profundo*, Santiago: Liberalia.
- MOULIAN, TOMÁS (1997). *Chile, anatomía de un mito*. Santiago: LOM ediciones.
- NAVIA, PATRICIO (2004). «Participación electoral en Chile, 1988-2001», *Revista de Ciencia Política*, vol. 24, n°1, pp. 81-103.
- OXHORN, PHILIP (1995). *Organizing civil society. The popular sectors and the struggle for democracy in Chile*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- PALEY, JULIA (2001). *Marketing democracy: Power and social movements in post-dictatorship Chile*. Berkeley: University of California Press.
- PNUD (1998). *Las paradojas de la modernización*. Santiago: PNUD.
- PNUD (2015). *Los tiempos de la politización*. Santiago: PNUD.
- PNUD (2014). *Auditoría a la Democracia: Más y mejor Democracia para un Chile inclusivo*. Santiago: PNUD.
- RÍOS, MARCELA (2015). «Tercera sesión del taller de movimientos sociales y partidos políticos: ¿Crisis de la política?». Fundación Chile 21-Fundación Friedrich Ebert, 23 de septiembre de 2015.
- ROBERTS, KENNETH (1998). *Deepening democracy? The modern Left and social movements in Chile and Peru*. Stanford, Stanford University Press.
- ROBERTS, KENNETH (2012). «Market Reform, Programmatic (De) alignment, and Party System Stability in Latin America». *Comparative Political Studies*, XX(X), pp. 1-31.

- ROBERTS, KENNETH (2016). «Chilean social movements and party politics in comparative perspective: Conceptualizing Latin America's 'Third Generation' of anti-neoliberal protest». En: Donoso, Sofía y von Bülow, Marisa (editoras), «Posttransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts». New York: Palgrave-MacMillan, por publicar.
- RODRÍGUEZ-VILLASANTE, TOMÁS; MARTÍ, JOEL Y MONTAÑÉS, MANUEL (2000). *La Investigación Social Participada. Construyendo Ciudadanía 1*. Barcelona: El Viejo Topo Editorial.
- ROSANVALLON, PIERRE (2006). *La contre-démocratie*. París: Seuil.
- RUIZ, CARLOS (2015). «Desigualdad y cambios en la estructura social, primera sesión del taller de movimientos sociales y partidos políticos». Fundación Chile 21-Fundación Friedrich Ebert, 9 de julio de 2015.
- SAWICKI, FRÉDÉRIC (2011). «Partis politiques et mouvements sociaux : des interdépendances aux interactions et retour». En: Luck, Simon y Dechezelles, Stéphanie (dir), 2011, *Voix de la rue ou voie des urnes. Mouvements sociaux et partis politiques*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- SCHAEFFER, COLOMBINA (2016). «Democratizing the flows of democracy: Patagonia sin represas in the awakening of Chile's civil society». En: Donoso, Sofía y von Bülow, Marisa (editoras), «Posttransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts». New York: Palgrave-MacMillan, por publicar.
- SCHORR, BETTINA (2015). «State-owned Mining in Chile or Why Some Communities Are More Contentious than Others. A Qualitative Pilot». Paper delivered for the Conference of the Asociación Latina Americana de Sociología (ALAS) in San José, Costa Rica, November 30-December 4, 2015.
- SCULLY, TIMOTHY (1992). *Rethinking the center: Party politics in nineteenth and twentieth century Chile*. Palo Alto: Stanford University Press.
- SIAVELIS, PETER (2009). «Elite-mass congruence, partidocracia and the quality of Chilean democracy». *Journal of Politics in Latin America* 1 (3), pp. 3-31.
- SILVA, EDUARDO (2009). *Challenging neoliberalism in Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- SOMMA, NICOLÁS (2015). «Participación ciudadana y activismo digital en América Latina». En: Sorj, Bernardo y Fausto, Sergio (editores), *Internet y movilizaciones sociales: transformaciones del espacio público y de la sociedad civil*. Fundación Konrad Adenauer, pp. 103-146.
- SOMMA, NICOLÁS y BARGSTED MATÍAS (2015). «La autonomización de la protesta en Chile». En *Socialización política y experiencia escolar: aportes para la formación ciudadana en Chile*, editado por Castillo, Juan Carlos y Cox, Cristián. Editorial del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 207-240.

- SOMMA, NICOLÁS y MEDEL, RODRIGO (2016). «Shifting relationships between social movements and institutional politics». En: Donoso, Sofia y von Bülow, Marisa (editoras), «Posttransitional social movements in Chile: Organization, trajectories and political impacts». New York: Palgrave-MacMillan, por publicar.
- SOMUANO, MARÍA FERNANDA (2007). «Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: una relación cambiante y compleja». *Política y Cultura* 27, pp. 31-53.
- TAGUIEFF, PIERRE-ANDRÉ (2002). *L'illusion populiste*. París: Berg International.
- VALDERRAMA, LORENA (2013). «Jóvenes, Ciudadanía y Tecnologías de Información y Comunicación. El movimiento estudiantil chileno». *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11(1), pp. 123-135.
- VALENZUELA, ARTURO (1977). *Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity*. Durham: Duke University Press.
- VALENZUELA, SEBASTIÁN; ARRIAGADA, ARTURO Y SCHERMAN, ANDRÉS (2012). «The Social Media Basis of Youth Protest Behavior: The Case of Chile». *Journal of Communication* 62 (2), pp. 299-314.
- ZARZURI, RAÚL (2015) «Cuarta sesión del taller de movimientos sociales y partidos políticos: La dimensión generacional y cultural». Fundación Chile 21-Fundación Friedrich Ebert, 15 de octubre de 2015.